

Las políticas neoliberales profundizan la desigualdad social

El Barómetro Social de España (BSE) recoge diversos indicadores que permiten situar la actual coyuntura de crisis en la onda larga neoliberal de las últimas tres décadas, ubicando en ese marco un balance de los efectos sociales de la crisis y de las políticas de ajuste adoptadas a partir de 2010 por los gobiernos del PSOE y del PP, así como algunas reflexiones sobre el creciente malestar social y las movilizaciones que pretenden un cambio de orientación en el modelo político y económico vigente.

La desigualdad en el reparto de los recursos económicos y en la distribución del poder es una característica estructural del capitalismo, así como su dinámica cíclica que reconfigura continuamente los desequilibrios que genera su propio desarrollo. La España franquista adoptó con retraso (a partir de los años sesenta), y con rasgos propios, las políticas keynesianas de la segunda posguerra mundial, con un fuerte incremento relativo de los salarios y una notable expansión de la sociedad de consumo y la puesta en marcha de las bases de un Estado de bienestar autoritario. El inicio del ciclo democrático, en el que se desarrollaron una serie de derechos sociales y económicos, coincidió con el fin del modelo de crecimiento de posguerra en los países centrales; así, durante décadas la ampliación de ciertas garantías sociales se desarrolló simultáneamente con el desarrollo de medidas típicamente neoliberales, entre ellas la reducción del gasto público, la bajada de impuestos, la desregulación del mercado laboral y financiero, etc. Estas medidas se habían aplicado en toda su extensión en determinados países periféricos en los años ochenta y noventa del siglo pasado (Consenso de Washington, crisis de la deuda externa, planes de ajuste auspiciados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, etc.). En el contexto español, en cambio, su introducción fue más pausada y no lineal, hasta que estalló la crisis actual y los sucesivos

Colectivo Ioé
equipo de
investigación social
integrado por
Carlos Pereda,
Walter Actis y
Miguel Ángel de
Prada

¹ Forma parte del grupo cooperativo Tangente (www.tangente.coop) y es autor del *Barómetro Social de España* (www.barometrosocial.es). www.colectivoioe.org.

gobiernos, al dictado de la troika y de los mercados financieros, han decidido aplicar la receta también en los países centrales. Así, el actual período de crisis, iniciado en 2008, forma parte de la onda larga neoliberal iniciada a mediados de la década de 1970.

El *Barómetro social de España* recoge indicadores de la evolución de la desigualdad social entre 1994 y 2013, lo que permite hacer una valoración del último ciclo expansivo (1994-2007) y de los recientes años de crisis.

Reparto del excedente: crecen los beneficios del capital a costa de los salarios

Entre 1994 y 2007 el valor monetario de las *acciones empresariales* –tanto las cotizadas en Bolsa como las no cotizadas– creció de manera extraordinaria, pasando de 0,4 a 2,8 billones de euros, a precios constantes, lo que multiplicó por siete su precio de mercado (ritmo interanual medio del 16%). Así se produjo una “burbuja accionarial” que se infló a doble velocidad que la burbuja inmobiliaria (con tasa interanual del 8% en el mismo periodo) y superó en cuatro veces al PIB (4,2%). Uno de los factores que explican el crecimiento y revalorización de las empresas españolas fue la inversión de capital extranjero que hizo de España uno de los países con mayor deuda externa privada del mundo.²

Al llegar la crisis, las acciones perdieron el 30% de su valor (830.000 millones de euros), aunque gran parte de las pérdidas se concentraron sólo en el primer año del ciclo (2008). Esta pérdida de valor de los activos generó una fuga de capital extranjero,³ que acentuó la desvaloración de las empresas. No obstante, el ritmo interanual de las pérdidas en los cinco años de crisis (6%) ha sido bastante menor que el ritmo de ganancias en los catorce años previos de crecimiento (16%). El valor del conjunto de las empresas en 2012 se situaba en el mismo nivel que en 2004, es decir, habían perdido bastante menos de la mitad de lo ganado en los años anteriores (véase gráfico 1).

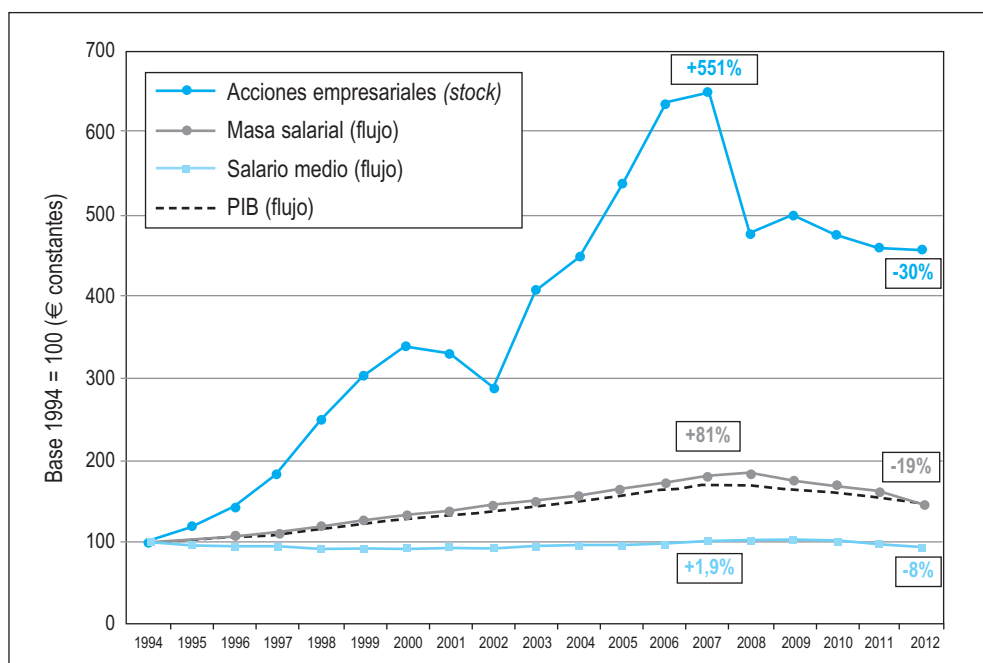
En contraste, el *salario medio* de la población trabajadora quedó casi congelado: avanzó sólo el 1,9% en el conjunto del período expansivo y ese crecimiento se produjo sólo en 2006 y 2007. Por su parte, la *masa salarial* (el total de retribuciones de la población asalariada), creció el 81%, algo por encima del PIB (70%), debido al extraordinario incremento de

² La estadística del *Joint External Debt Hub* (Banco de Pagos Internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y OCDE) indica que entre 2003 y 2008 la deuda externa privada de España pasó de 0,7 a 2,1 billones de dólares (en el mismo período la deuda externa pública pasó de 0,2 a 0,3 billones).

³ Según el *Coordinated Portfolio Investment Survey* del FMI la inversión alemana y francesa en España se multiplicó por seis entre 2001 y 2007, (de 82.000 a 520.000 millones de dólares), para reducirse en un 35% entre 2007 y 2012 (salida de 184.000 millones).

la ocupación (de 12 a 20 millones), con una tasa de empleo temporal tres veces superior a la media de la Unión Europea por aquellos años. Entre 2007 y 2012 la masa salarial (medida en euros constantes) se ha reducido un 19%. Este descenso podría atribuirse “simplemente” a la caída del empleo; sin embargo, paralelamente se ha registrado una caída del 8% del salario medio real (en euros constantes). De este modo, la participación de los salarios en la renta nacional, que había descendido continuamente durante el último ciclo de crecimiento, ha vuelto a caer con la adopción de políticas “de ajuste” desde 2010. En suma, se *está perpetuando una tendencia estructural a la redistribución regresiva de la renta.*

Gráfico 1. Evolución de las acciones y de los salarios (1994-2012)

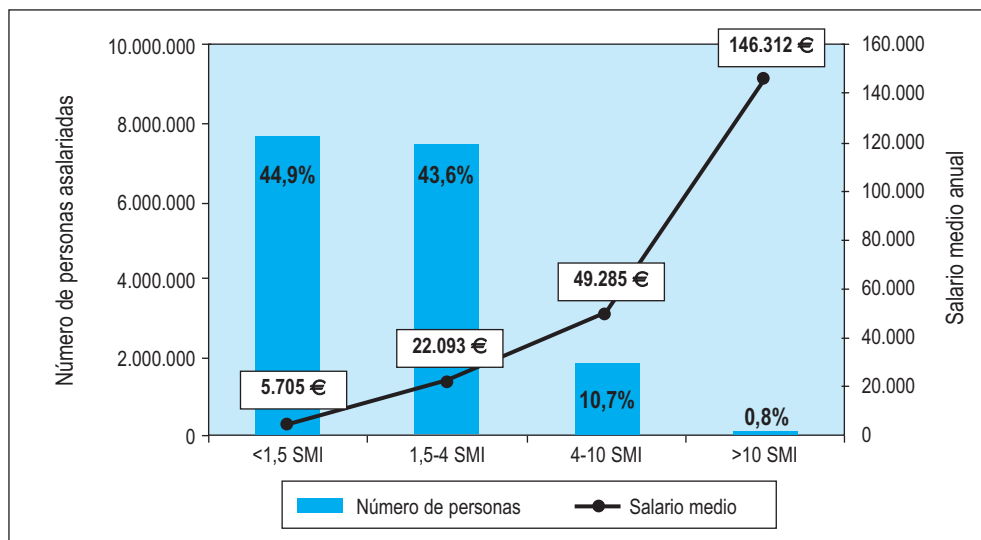


Fuentes: Banco de España, para las acciones empresariales (cotizadas y no cotizadas); Agencia Estatal de Administración Tributaria, para los salarios y Contabilidad Nacional de España, para el PIB. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Empleo, indicador 8.

Por otra parte, la polarización entre los salarios altos y bajos se ha incrementado de forma importante en la etapa de crisis. Si en 2007 los asalariados “ricos” (por encima de cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional) percibían un promedio 17,6 veces superior a los “pobres” (por debajo del SMI), en 2012 pasó a ser de 18,9 veces. La situación existente en 2012 (último año publicado) queda reflejada en el gráfico 2, que muestra la magnitud de distintos segmentos de los asalariados y la de sus respectivos ingresos.

- *Tramo inferior (menos de mil euros/mes)*: formado por quienes perciben salarios en cómputo anual por debajo de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), o sea, menos de 962 euros/mes (el SMI era de 641 euros). Aquí se sitúa el 45% de las personas asalariadas, a las que habría que sumar –al menos– a los parados sin cobertura (3,2 millones en 2013) y a los perceptores de rentas de inserción (240.000).
- *Tramos intermedios (entre mil y dos mil quinientos euros/mes)*: son quienes perciben entre 1,5 y 4 veces el SMI; supone el 43,6% de la población ocupada y constituye el colchón entre la mayoría de bajos ingresos y la élite económica.
- *Tramo superior (más de dos mil quinientos euros/mes)*: en el vértice de la distribución salarial se sitúa algo más del 10% de los trabajadores, entre los que destaca una minoría (el 0,8%) con salarios por encima de 10 veces el SMI. En este grupo se sitúan los 534 consejeros y miembros de la alta dirección de las empresas incluidas en el Ibex 35 cuyos ingresos medios en 2013 fueron de 67.700 euros mensuales. Se trata de un grupo social formalmente asalariado pero cuyas funciones son las de dirección de las empresas representando directamente los intereses de sus propietarios.

Gráfico 2. Diferencias de salario por tramos en 2012



Fuente: AEAT, Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Renta y patrimonio.

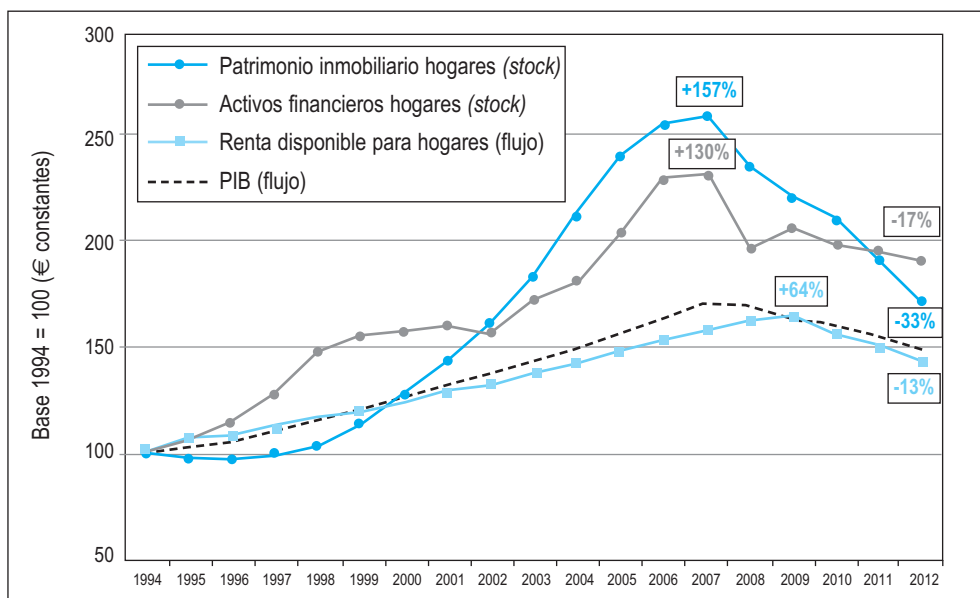
Las desigualdades salariales por sexo y edad siguen siendo elevadas, aunque han tenido evolución diferente. En 2000 el salario medio de las mujeres se situaba un 22,7% por debajo del promedio general, en 2012 la diferencia se redujo hasta el 14,7%. En cambio, la retribución media de los jóvenes era un 54,6% más baja en 2000 y pasó a ser un 64,4% inferior en 2012. También ha aumentado la brecha salarial para la mano de obra extranjera: en 2008 su retribución era un 41,8% más baja que la media global y en 2012 un 44,4% inferior.

La riqueza y la renta de los hogares: desigualdad creciente

En el último ciclo expansivo de la economía española (1994-2007) la *riqueza* agregada de los hogares (suma del patrimonio inmobiliario y de los activos financieros) se revalorizó de forma extraordinaria, pasando de 2,9 a 7,4 billones de euros, en moneda constante del año 2012. Su crecimiento medio anual (7,3%) duplicó el de la *renta* disponible ingresada cada año por las familias (3,6%). El gráfico 3 muestra que la riqueza de los hogares aumentó un 148% (los inmuebles el 157% y los activos financieros el 130%), mientras su renta anual creció un 58% y llegó a su cota máxima (64%) en 2009. Esta revalorización de activos, sumada al estancamiento del salario real, dio pie a un creciente endeudamiento de los hogares.

Además, en los años de bonanza se mantuvo una importante desigualdad en el reparto de la renta y la riqueza, aunque cada una tuvo una evolución opuesta. La distribución de la renta mejoró (el coeficiente de Gini pasó de 35 en 1997 a 31,9 en 2007), aunque se mantuvo siempre con peores resultados que la media comunitaria. En cambio, la distribución de riqueza empeoró claramente: según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, entre 2002 y 2005 la ratio de desigualdad entre el 25% de hogares más ricos y el 25% más pobre pasó de 33,3 a 39,3.

Gráfico 3. Evolución de la riqueza y de la renta disponible de los hogares (1994-2012)



Fuentes: Banco de España para los activos financieros de los hogares; J. M. Naredo, C. Carpintero y C. Marcos, «Patrimonio en vivienda y ahorro de los hogares en el final del ciclo inmobiliario», *Cuaderno de Información*, 215, para el patrimonio inmobiliario; y Contabilidad Nacional de España, para la renta disponible de los hogares y el PIB. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Renta y patrimonio, indicador 4.

En los primeros años de crisis (2008 y 2009) la renta disponible de los hogares se mantuvo en lento pero continuo ascenso, a pesar de la bajada del PIB, pero cayó un 13% en 2010-2012, a raíz del cambio de política laboral y de recortes sociales iniciado por el gobierno del PSOE en la primavera de 2010. Por su parte, la riqueza de los hogares se redujo un 29% entre 2007 y 2012: los bienes inmuebles perdieron el 33% de su valor (1,8 billones en euros constantes) y los activos financieros el 17% (365.000 millones).

En suma, se está perpetuando una tendencia estructural a la redistribución regresiva de la renta

Así, tanto el reparto de la renta como de la riqueza han empeorado en el ciclo de crisis. El Coeficiente de Gini de distribución de la renta ha perdido lo ganado en la etapa de crecimiento (aumentó de 31,9 en 2007 a 34,5 en 2012), generando entre otros efectos un aumento de los hogares en riesgo de pobreza (de 19,7% en 2006 a 21,6% en 2012), a pesar de la disminución constante de la línea de pobreza a causa de la caída de la renta nacional. Un estudio reciente de la OCDE ha constatado que España es el país donde más se ha ampliado en los primeros años de crisis la brecha entre los hogares más pobres y más ricos: mientras el 10% de la población más pobre ha reducido sus ingresos un 13,7% entre 2007 y 2010, el 10% más rico lo redujo en un 1,1%.⁴

En cuanto a la riqueza, la brecha de desigualdad entre los hogares más ricos y más pobres pasó de 39 a 50 entre 2005 y 2009 (gráfico 4).⁵ De este modo, la desigualdad en el reparto de la riqueza es cinco veces más pronunciada (de 50 a 1 entre los cuartiles más rico y más pobre) que en el reparto de la renta (de 10 a 1 entre los grupos con más y menos ingresos). Por tanto, los análisis que se centran sólo en la distribución de la renta no perciben la magnitud real de las desigualdades. Además, éstas son aún mayores que lo que nos indican las fuentes, pues una parte de las riquezas se halla oculta en paraísos fiscales o en la economía sumergida. En todo caso, *la tendencia en la coyuntura de crisis es a una creciente polarización social, tanto en la distribución de la renta como de la riqueza.*

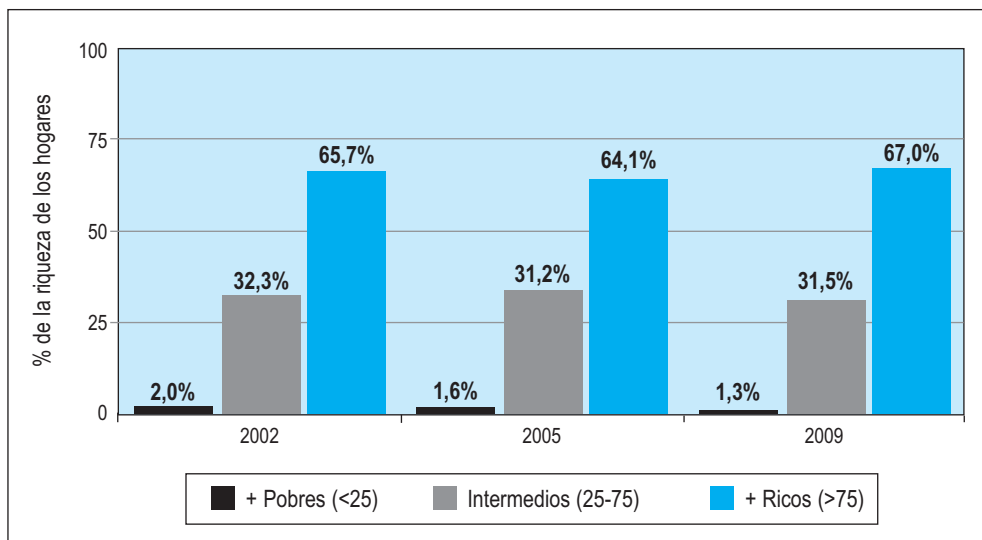
Esta dinámica remite a un modelo social cada vez más jerarquizado en el que la competitividad/rentabilidad de las grandes empresas tiene como correlato el estancamiento o disminución de los salarios y la pérdida de derechos sociales y laborales. Frente a la opinión mayoritaria de que “la distribución de los ingresos en España es injusta” (siempre por

⁴ OCDE, *Society at a Glance 2014. The crisis and its aftermath*, 2014.

⁵ El Banco de España realizó una nueva EFF en 2011-2012. Aunque prometió publicar resultados a finales de 2013 hasta la fecha los resultados no son accesibles.

encima del 80% en las encuestas del CIS), la política económica adoptada por los sucesivos gobiernos ha favorecido el incremento de dicha desigualdad, favoreciendo a la banca y las grandes empresas en perjuicio de la mayoría de la población.

Gráfico 4. Desigual reparto de la riqueza en los hogares españoles (2002-2005-2009)



Fuente: Banco de España. Elaboración del *Barómetro social de España*, ámbito de Renta y patrimonio, indicador 10.

Un sistema ecológicamente insostenible

En el terreno medioambiental, el modelo de crecimiento del ciclo expansivo dio lugar a un intenso deterioro de la calidad de la tierra, el agua y el aire. El consumo de energía se incrementó en un 50%, el doble que la media europea, provocando que la dependencia energética de España pasara del 70 al 80% pese a la expansión de las energías renovables. El uso de plaguicidas en la agricultura aumentó en un 60%, con los consiguientes efectos contaminantes, mientras las emisiones de CO² crecieron tres veces más de lo comprometido en el Protocolo de Kioto, a un ritmo similar al de China o la India, y muy superior a la media europea. España se sumaba así a la irresponsable carrera que agota los recursos energéticos no renovables del planeta y acelera el cambio climático.

A partir de 2008, la recesión económica afectó a la producción, a la construcción, al transporte y al consumo eléctrico, provocando una sustancial mejora de algunos indicadores ambientales: en 2010 las emisiones de CO² se habían reducido un 19% y el consumo energético un 11%, lo que permitía a España acercarse al cumplimiento de las exigencias

del Protocolo de Kioto. Las energías renovables doblaron su contribución pasando del 5,4 al 11,1% del mix. Sin embargo, varios indicios apuntan a que estas mejoras fueron coyunturales ya que en los últimos tres años algunos indicadores clave han vuelto a empeorar, a pesar del continuo retroceso de la producción medido por el PIB. La dependencia energética del exterior y las emisiones de CO² han vuelto a repuntar, mientras disminuye el peso de las energías renovables, acosadas por las políticas gubernamentales.

Frente a la opinión mayoritaria de que «la distribución de los ingresos en España es injusta», la política económica adoptada por los sucesivos gobiernos ha favorecido el incremento de dicha desigualdad, favoreciendo a la banca y las grandes empresas en perjuicio de la mayoría de la población

La huella ecológica mide la relación entre la biocapacidad (capacidad productiva y de absorción de residuos de las tierras y aguas del país) y la producción (sus consumos energéticos y residuos). El balance general muestra, por un lado, la importancia de las políticas estatales en la mejora de indicadores ambientales (reducción de la intensidad energética durante el mandato de Cristina Narbona en Medio Ambiente, desarrollo de las renovables en base a subsidios estatales) y, por otro, el conflicto que existe entre la dinámica del capitalismo actual y los límites de la base ecológica que lo sustenta. Los datos muestran que en 2005 se necesitaba 4 veces el territorio de España para sustentar ecológicamente la producción del país; con el inicio de la crisis la situación mejoró algo: en 2010 “sólo” se necesitaba 3,3 veces dicha superficie.⁶ Por tanto, *el modelo productivo –sea cual sea el momento del ciclo económico– excede con creces la capacidad de sustentabilidad del territorio*, lo que reclama una reconversión radical de sus características.

Efectos sociales de la crisis

Récord de desempleo

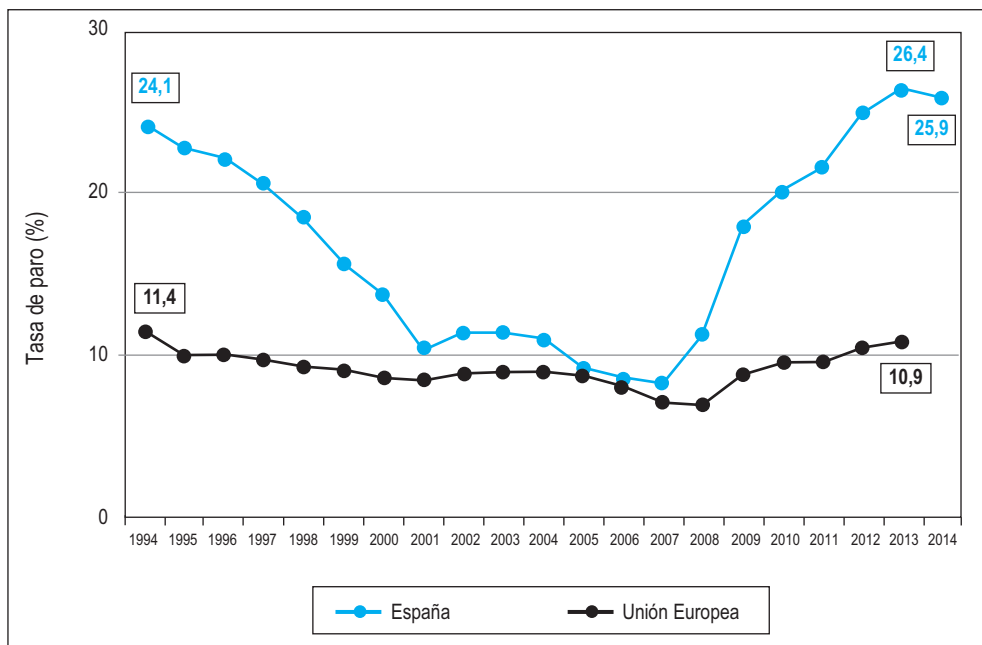
Entre 1994 y 2007 los indicadores de acceso al empleo mejoraron considerablemente: la tasa de actividad creció del 51 al 60%, especialmente entre la población femenina; el número de ocupados aumentó de 12 a 20 millones (3 de ellos inmigrantes que produjeron un inesperado crecimiento de la población del país); el desempleo se redujo drásticamente, pasando del 23,9 al 8,3%. En cambio, en seis años de crisis se han perdido 3,6

⁶ Véase Global Footprint Network (2013).

millones de empleos y la tasa de paro superó en 2013 el 26%, record histórico de este indicador.

Tanto la creación de empleo antes de la crisis como su destrucción posterior han tenido lugar con una intensidad mucho mayor que en el resto de la Unión Europea: en 2005 y 2006 la tasa española de desempleo llegó a situarse en la media comunitaria, para pasar a ser más del doble en la actualidad (gráfico 5) situándose, junto a Grecia, como farolillos rojos de la Europa comunitaria en esta materia. Ello se debe principalmente a la elevada tasa de temporalidad y a la precariedad de los puestos de trabajo en sectores muy sensibles al ciclo económico (construcción, comercio, servicios no cualificados, etc.), donde se aplicó un modelo de explotación extensiva de la mano de obra que afectó en mayor medida a la juventud y al colectivo inmigrante.

Gráfico 5. Evolución del desempleo en España y la Unión Europea (1994-2014)



Fuentes: EPA y Eurostat. Elaboración del *Barómetro social de España*, ámbito de Empleo, indicador 2.

(*) Para 2013, media de los ocho primeros meses en el caso de la Unión Europea; para 2014, primer trimestre en el caso de España.

Endeudamiento y desahucios

Durante el ciclo económico expansivo la venta de la creciente producción, en un contexto de no crecimiento del salario real, se realizó en base a dos mecanismos principales: por un

lado, el aumento de la demanda agregada (la masa salarial) derivada del aumento de ocho millones de personas ocupadas; por otro, la concesión masiva de créditos al consumo y muy especialmente para la compra de vivienda. Las deudas de los hogares suponían en 1994 el 66% de su renta anual, y pasaron al 149,3% en 2007, proporcionando un volumen de negocio al sistema financiero de un billón de euros. En el ciclo de crisis el volumen de deuda de los hogares se ha reducido de forma limitada (hasta 142,4% de su renta anual); además, grava mucho más a las familias pobres: según la Encuesta Financiera de las Familias (Banco de España, 2009) la deuda pendiente de los hogares pobres suponía una carga 17 veces mayor en relación a su patrimonio que en el caso de los hogares con mayor riqueza.

Entre 2007 y 2012 el precio del metro cuadrado de vivienda libre se ha reducido un 31%, según el Ministerio de Fomento, pero más de 300.000 familias afectadas por la crisis y el desempleo no han podido hacer frente a sus deudas hipotecarias provocando un aluvión de desahucios. A estos se añaden los de quienes no pueden pagar el alquiler, entre 60.000 y 70.000 cada año, lo que suma en total más de medio millón de familias desalojadas de sus viviendas en los últimos cinco años.

Deterioro de las condiciones de vida

Las políticas antisociales adoptadas para abordar la crisis han generado graves problemas para un amplio sector de la clase trabajadora, muy especialmente para quienes se encuentran en paro, sobre todo si no reciben ninguna prestación de desempleo (3,2 millones de personas) o cuando todos los miembros de su grupo de convivencia se encuentran sin trabajo (uno de cada 10 hogares). A partir de 2010 los salarios y la renta disponible de los hogares caen a ritmo creciente y la población en riesgo de pobreza ha aumentado en más de un millón de personas. Las subidas del IVA, de la luz o del transporte, junto a la congelación de las pensiones, contribuyen a reducir el poder adquisitivo de la mayoría de la población.

Más allá del ámbito monetario es preciso contemplar los cambios del *trabajo doméstico* y *de cuidados*, que constituye un componente esencial del bienestar de las personas, aunque es invisibilizado por el discurso social y económico dominante. Según la Encuesta de Empleo del Tiempo de 2010 dichas tareas insumen un 23% más que el tiempo total dedicado al trabajo remunerado, y recae mayoritariamente sobre las mujeres. A medida que éstas amplían su presencia en el empleo remunerado, los hombres se han implicado más en las tareas del hogar (realizaban el 23% del trabajo doméstico en 2003 y el 30% en 2010). Sin embargo, estamos muy lejos de un equilibrio entre sexos: hoy la carga de trabajo global (doméstico y extradoméstico) de las mujeres supera en un 20% a la masculina. Por otra parte, un análisis más afinado de esta evolución debe tener en cuenta el aporte de mano de obra externa, sobre todo de mujeres inmigrantes, para el trabajo doméstico y de cuidados,

así como la figura del cuidado personal en la Ley de Dependencia, actualmente sometida a un severo proceso de recortes.⁷

La política de recortes incrementa el malestar y la movilización social

La tesis oficial del Gobierno español sostiene que las políticas sociales están sobredimensionadas en relación a la capacidad económica de la hacienda pública y que, por tanto, es imprescindible introducir recortes en las prestaciones y servicios, así como procesos de privatización que impliquen una reducción del gasto. Consecuentemente, el problema de la *deuda pública* es presentado como la clave de la crisis del Estado de bienestar. El gasto público en relación al PIB creció desde el 39,2% en 2007 al 46,1% en 2009, como consecuencia de un aumento del gasto (sobre todo en prestaciones de desempleo), y una caída de cinco puntos en la recaudación fiscal (desde el 37,6% al 31,4% del PIB). Como resultado el *saldo fiscal del Estado* pasó de +2% en 2007 a -11,1% en 2009, para situarse en -7,1% en 2013. La suma de estos déficits amplía el peso del pago anual de intereses de la deuda en los presupuestos generales del Estado, ahora garantizados por la reforma del artículo 135 de la Constitución (septiembre, 2011) según el cual esos pagos «gozarán de prioridad absoluta».

Entre otras medidas, queda sin efecto el Pacto de Toledo sobre Pensiones, se aplican drásticos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, se da marcha atrás a la ley de dependencia, se bajan los salarios del funcionariado, se privatizan servicios públicos, incluso aquellos que son rentables como la canalización y distribución del agua, etc. Por otra parte, se amplían los impuestos indirectos que afectan a toda la población y se llevan a cabo sucesivas reformas laborales que frenan la negociación colectiva y favorecen los despidos con baja indemnización, a la vez que se proporciona dinero público y avales del Estado para salvar a la banca.

En definitiva, se despliega sin restricciones el *modelo social de capitalismo neoliberal* canonizado en la Unión Europea en el Tratado de Maastricht (1992) y reforzado en el Tratado de Lisboa (2009), después del fallido intento de Constitución Europea (2006). La crisis económica está siendo la ocasión para profundizar en esta estrategia, a través de tratados como el de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (Pacto Fiscal, marzo de 2012) o el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, julio de 2012). El Pacto Fiscal tiene como objetivo fortalecer las reglas para asegurar que los Estados signatarios apliquen unas políticas

⁷ Véase C. Carrasco, C. Borderías y T. Torns (eds.), *El trabajo de cuidados*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011; C. Vega, *Culturas del cuidado en transición*, UOC, Barcelona, 2009; y A. Pérez Orozco y S. López Gil, *Desigualdades a flor de piel: cadenas globales de cuidados*, ONU Mujeres, 2011.

presupuestarias estrictas con sanciones en caso de incumplimiento que pueden alcanzar el 0,1% del PIB. El MEDE se encarga de otorgar préstamos a los países de la zona euro imponiendo en contrapartida estrictas condiciones macroeconómicas y recortes del gasto social (Grecia y Portugal).

Estas políticas han sido elevadas a rango constitucional en España, por presión directa del Banco Central Europeo y sin debate público. Responden a los mismos planteamientos que dieron lugar a los planes de ajuste impulsados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en muchos países de la periferia a partir del Consenso de Washington (1989). Entre sus objetivos destacan la protección de la propiedad privada, la desregulación financiera y de los mercados, la disciplina presupuestaria, la eliminación de subsidios sociales, el adelgazamiento del Estado a través de la privatización de empresas y servicios públicos, etc.⁸

En expresión de Eric Toussaint, estamos ante «la mayor ofensiva realizada desde la segunda guerra mundial a escala europea por el Capital contra el Trabajo. Para el Capital, se trata de aumentar aún más la precarización de los trabajadores, de reducir radicalmente su capacidad de movilización y de resistencia, de reducir los salarios y diferentes subsidios sociales de forma importante a la vez que se mantienen las enormes disparidades entre los trabajadores dentro de la UE a fin de aumentar la competencia entre ellos».⁹

En este contexto crece el malestar social que se manifiesta en el rechazo de la “clase política” (el tercer problema para la opinión pública, detrás del paro y los problemas económicos) y en las movilizaciones de amplios sectores de la sociedad (mareas de los diversos colores, cumbre social, dos huelgas generales, marchas de la dignidad, diversos frentes críticos), que reclaman otros escenarios para salir de la crisis. Entre otras medidas, se plantea la necesidad de *reorientar los recortes* (por ejemplo, hacia el gasto militar) e *incrementar los ingresos públicos* (evitando el fraude y los paraísos fiscales, incrementando la recaudación entre las rentas altas, etc.).

Diversos movimientos impulsados tras el 15M plantean un cambio de paradigma en la economía y en el ejercicio de la política, reclamando una participación directa de las poblaciones en los asuntos que les conciernen. Se denuncia a los gobiernos y a las instituciones europeas por gestionar la crisis y la deuda soberana como herramientas de sometimiento

⁸ Véase Intermon-Oxfam, *Crisis, desigualdad y pobreza. Aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los recortes sociales en España*, Informe núm. 32, 2012.

⁹ E. Toussaint, «La mayor ofensiva contra los derechos sociales realizada desde la segunda guerra mundial a escala europea», 3ª parte de *Bancos contra pueblos: los entresijos de una partida amañada*, Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, CADTM, 2012.

de los pueblos a los poderes económicos y financieros. La subordinación de la política social a las prioridades de la acumulación capitalista, centrada en su núcleo financiero, ha acelerado en España la desconfianza en el modelo social surgido de la Transición, abriendo un debate instituyente que parecía cerrado en torno a las causas estructurales que impiden el desarrollo de una democracia real y una economía socialmente justa, en armonía con la naturaleza y solidaria en el plano internacional.